

Necesidad que interpela

Venezuela enfrenta hoy una situación sin precedentes. En un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos, hacemos eco de la matriz de opinión desarrollada en torno a la crisis humanitaria compleja que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país en busca de mejores condiciones de vida, –en el mejor de los casos–, en condición de asilados y refugiados, suplicando ser protegidos.

Una situación para nada nueva en el continente americano que hoy cobra mayor fuerza y demanda medidas urgentes. En una Declaración Pública, registrada el 20 de junio de 2019, a propósito del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional expresa lo siguiente:

Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.

La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de dere-

chos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia acoge la mayor cantidad de personas venezolanas (1,3 millones), seguida por Perú (768 mil), Chile (288 mil), Ecuador (263 mil), Argentina (130 mil) y Brasil (168 mil), según los datos más recientes publicados por Acnur. México y los países de América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela.

No obstante, pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, *algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas*: “El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar a las personas venezolanas un ‘visado humanitario’ para poder ingresar al país.” (Amnistía Internacional, *ibid.*)

También en el Caribe, principal foco receptor de la *diplomacia petrolera* del extinto presidente Chávez, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40 mil venezolanos, cerró recientemente un proceso de inscripción para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14 mil personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, deci-

dieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país.

“Estas cifras alarmantes resaltan la necesidad urgente de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos. “Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional”.

A pesar de los esfuerzos, las cifras son cada vez más alarmantes y ante esta realidad los Estados han intensificado progresivamente sus políticas migratorias. Entre tanto, el riesgo de deportación o de que se le impida el ingreso a estos países deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.

”